

especial para *El Financiero*, edición del 4 de agosto de 1992  
Actas michoacanas  
miguel ángel granados chapa

Ayer por la mañana se reunieron en el domicilio particular de Beatriz Paredes los negociadores del cotejo de actas planteado para Michoacán por el líder nacional priísta, Genaro Borrego, (cuyo apellido, dicho sea entre paréntesis, ha hecho surgir la broma de que es el primer presidente de ese partido surgido de las bases). Esta vez no acudió al encuentro con la secretaria general del PRI el candidato perredista a la gubernatura, Cristobal Arias, y no porque no estuviera en la ciudad de México, ya que al mediodía se hallaba en el DF. Después de tres encuentros, sin que se haya concretado la comparación documental, realizados en la capital federal, la táctica perredista exigía que la ex gobernadora de Tlaxcala devolviera la visita y se encontrara con Arias en Morelia. Y no habiendo sido así, el candidato del PRD debe haber juzgado necesario ser sustituido. Por eso el PRD estuvo representado por el senador Porfirio Muñoz Ledo y por el doctor Samuel I. del Villar. Javier López Moreno, jefe de asesores de Borrego, acompañó a la sublideresa priísta. Ambas delegaciones se completaron con la presencia de dirigentes de los dos partidos en Michoacán.

Terminó la reunión sin que de nuevo se produjera un acuerdo sobre la materia, los fines y la publicidad del cotejo. Salvo que en el curso de la tarde del lunes se modificaran las cosas --este artículo se escribe hacia las catorce horas--, se comprobaría así la impresión primaria provocada en muchos observadores, de que ese acto político no se realizaría jamás, y que su propuesta y posterior aceptación obedecía a motivos distintos que el comprobar de modo fehaciente las afirmaciones de los partidos sobre su respectiva victoria.

Sorprendió, en efecto, que el ex gobernador de Zacatecas formulara la invitación o desafío para cotejar las actas. Menudearon las opiniones, entre priístas, que juzgaron un error la proposición, pues con el solo hecho de emitirla se ponía en entredicho el proceso. Con ello se admitía que el mecanismo legal era insuficiente para validar las elecciones, y que era necesario impregnarle un aditivo político. Se atribuyó el yerro a la inexperiencia del presidente del PRI, que si bien participó en elecciones dos veces (cuando fue diputado federal, y gobernador) y fue oficial mayor de su partido, no se ha entrenado en la brega del manejo del voto. Se opinó asimismo que ~~el~~ error de Borrego consistió en suponer que el PRD no admitiría comparar las actas, sea porque no contara con suficiente material para hacerlo, sea porque eso contradecía su estrategia de proclamarse

diplomacia

triunfador, capaz de probarlo ante las instancias legales y sostener la victoria con movilizaciones intensas y extensas.

En abono del dirigente nacional priísta, el transcurso de los días parece probar que no se trató de un desliz, sino de una táctica que ya ha rendido sus frutos. El objetivo probable habría consistido en evitar que durante las tres semanas siguientes a la propuesta, se desbordara la inconformidad perredista. Tres circunstancias imponían al PRI esa necesidad. La primera de ellas, de orden local, es el largo lapso previsto por la ley michoacana entre las elecciones y su calificación, que en momentos de querrela conflictiva como los presentes constituye un tramo peligroso, máxime que a su vez el Tribunal Electoral Estatal actúa parsimoniosamente en la resolución de las quejas que debe conocer: En la segunda quincena de julio apenas había resuelto 5 de los 37 recursos de inconformidad presentados por la oposición (y todos los rechazó por improcedentes).

Las otras dos circunstancias que imponían la necesidad de una tregua en Michoacán eran el viaje del Presidente Salinas y las elecciones de la segunda tanda, en seis entidades federativas. La gira presidencial se iniciaba el viernes siguiente al martes en que se produjo el reto o invitación al cotejo. Y si bien Borrego pareció desear que ese acto se realizara premiosamente, era claro que realizarlo responsablemente llevaría tiempo. Manteniendo abierta la posibilidad de que los contendientes se entendieran al menos en un modo de transparentar sus posiciones, se eliminó el riesgo de que la prensa británica, francesa, española o húngara se ocupara, aun con mayor profusión que de la visita del Presidente de México, de movilizaciones o disturbios en Michoacán.

Finalmente, llegar a elecciones (en entidades donde el PRD es la segunda fuerza electoral, como Veracruz y Oaxaca, o donde como en Durango, se asoció a la principal oposición), mientras en Michoacán la protesta se generalizaba en las calles y caminos, hubiera contaminado la situación política en esos estados, en adición a sus propias fuentes de conflicto. Una vez realizados esos comicios, y concluido el viaje presidencial, se puede realizar el cotejo o desistirse de él atribuyendo a la contraparte haberlo impedido mediante condiciones inadmisibles.

Cabe preguntarse si la virtual tregua que surgió del planteamiento de Borrego ocurrió sólo por la mezcla de sagacidad priísta y candor perredista, o si se trata de un valor entendido entre las partes. No hablo de una transacción ilegítima, sino de un acuerdo destinado a plantear los términos de la situación michoacana lejos de la riesgosa pasión que estaba bullente en los días que siguieron al 12 de julio. Sólo si se ignora el potencial explosivo que existe en

Michoacán se puede desestimar cualquier esfuerzo por mitigar los ardores perredistas, sin que al hacerlo se olviden los principios y los intereses de ese partido.